



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-002-2017-00999-01
Demandante:	Martha Yeny Zuleta Gómez
Demandado:	Colmena Seguros S.A.
Asunto:	Apelación sentencia
Procedencia:	Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín
M. Ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Pensión de Invalidez Profesional

**Medellín, mayo cuatro (4) de dos mil veintitrés (2023)**

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por Martha Yeny Zuleta Gómez, respecto de la sentencia proferida el 15 de marzo de 2023 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral de primera que instauró contra Colmena Seguros S.A., conocido con el Radicado Único Nacional 05001-31-002-2017-00999-01.

**1.- ANTECEDENTES**

## **1.1.- DEMANDA**

La señora Martha Yeny Zuleta Gómez promovió demanda ordinaria laboral en contra de Colmena Seguros S.A., pretendiendo se declare la nulidad o ineficacia del Dictamen 2148054-1 del 09 de diciembre de 2016 rendido por la aseguradora accionada., y en su lugar, se establezca una pérdida de capacidad laboral superior al 50%; de consiguiente, pretende el reconocimiento de una pensión de invalidez profesional, o en subsidio, de la indemnización por incapacidad permanente parcial, con los intereses de mora o la indexación de las sumas reconocidas.

En respaldo de tales pedimentos la señora Martha Yeny Zuleta Gómez expuso que labora al servicio del Hospital San Vicente de Paúl de Barbosa – Antioquia, y desempeña el oficio de auxiliar de enfermería, que el 25 de febrero de 2009 sufrió un accidente de trabajo al ser golpeada en la cabeza con un objeto contundente, evento que le generó trauma cráneo encefálico con edema cerebral, hipertensión intracraneal, cefalea postraumática crónica, episodios de amnesia, parestesias en el hemicuerpo izquierdo, disartria, migraña, trastorno de ansiedad, convulsiones y epilepsia focal.

Sostuvo que su estado de salud se ha venido degenerando progresivamente en relación a las continuas crisis convulsivas, acompañadas de cefaleas intensas, y una pérdida de la memoria más marcada, patologías que han menoscabado significativamente su desempeño laboral, debido a las reiteradas incapacidades, que han afectado su estado psicológico al punto de generarle un cuadro depresivo por no poder desarrollarse en condiciones adecuadas y dignas.

Informó que Colmena Seguros S.A. la calificó con un 21,30% de pérdida de capacidad laboral derivada del accidente de trabajo, que no reclamó la indemnización por incapacidad permanente parcial porque está convencida que le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez, y que la calificación practicada adolece de graves irregularidades porque desconoce el progreso de las enfermedades crónicas y degenerativas, y los trastornos

psicológicos que se derivaron de las mismas, y porque no refiere la valoración del rol familiar, ocupacional y social (págs.06-09, doc.01, carp.01).

## **1.2.- CONTESTACIÓN**

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado legalmente constituido, Colmena Seguros S.A. replicó la demanda aceptando como cierto que la señora Martha Yeny Zuleta Gómez labora al servicio del Hospital San Vicente de Paúl de Barbosa – Antioquia, desempeña el oficio de auxiliar de enfermería, sufrió un accidente de trabajo el 25 de febrero de 2009 al ser golpeada en la cabeza con un objeto contundente, y fue calificada por la entidad, a través del Dictamen 250234 del 09 de diciembre de 2016, con una pérdida de capacidad laboral del 21,30%.

Sostuvo que los registros de la historia clínica adosados a la demanda desvirtúan la relación de los síntomas aludidos en el libelo genitor, en la medida en que dan cuenta de las buenas condiciones de la paciente, e igualmente señalan que las eventuales crisis que sufre se desencadenan por la supresión de la medicación, y que la actora solo reporta 42 días de incapacidad de origen laboral durante sus casi 10 años de afiliación al sistema de riegos laborales, coligiéndose que, contrario a lo manifestado en la demanda, la actora continuó prestando sus servicios de forma normal, y sin que se avizore menoscabo de su desempeño laboral, conforme a las evaluaciones de su condición laboral y exámenes periódicos ocupacionales.

Aseveró que la valoración realizada por la Comisión de Medicina Laboral de la ARL tuvo en cuenta todos los registros médicos, resultados de exámenes diagnóstico, pronóstico, manejo y tratamiento efectivo de las patologías de la demandante, y que contra el mismo la actora no manifestó ninguna inconformidad, por lo que se encuentra en firme, y surte los efectos correspondientes.

De consiguiente, y en oposición el éxito de las pretensiones, excepcionó la inexistencia de causal de nulidad del dictamen de la comisión de medicina laboral de Colmena; validez y obligatoriedad del dictamen impugnado; falta de título y causa; inexistencia de pérdida de capacidad laboral; petición antes de tiempo y ausencia de controversia; prescripción; pago y compensación; falta de legitimación en la causa por activa y pasiva; inexistencia de derecho en favor de la demandante; inexistencia de la obligación; inexistencia de causa para el reconocimiento de intereses moratorios o indexación; y buena fe (págs.338-351, doc.01, carp.01).

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 15 de marzo de 2023 declaró que a la señora Martha Yeny Zuleta Gómez le asiste el derecho al reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente parcial; condenó a Colmena Seguros S.A. a pagar en favor de la demandante la suma de \$27.100.176, indexada desde enero de 2018 y hasta que se materialice el pago efectivo; declaró no probada la excepción de prescripción; y se abstuvo de condenar en costas a las partes (docs.51-52, carp.01).

### **1.4.- RECURSO DE APELACIÓN**

El poderhabiente judicial de la señora Martha Yeny Zuleta Gómez impetró el recurso de alzada en orden a que se revoque la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se acoja la pretensión principal, disponiendo el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez profesional, arguyendo que el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez carece de los elementos esenciales e idóneos para dar pleno convencimiento, toda vez no se tuvo en cuenta la historia clínica neurológica, psicológica y psiquiátrica de los años 2017, 2018 y 2019, tal y como se admitió en la respuesta a la aclaración solicitada, la cual obra en el expediente digital y refiere la gravedad de las patologías que padece su poderdante; que la

demandante no fue coherente cuando fue valorada por la psiquiatra del hospital, y omitió describir la sintomatología psicótica que padecía, porque había sido medicada por la psiquiatra particular; que el dictamen pericial rendido por la doctora Paola Andrea David Tulcán, da cuenta todos los hechos, síntomas, diagnósticos y adherencia al tratamiento, a fin de respetar el principio de integralidad como soporte metodológico para la calificación del estado real de la demandante, teniendo en cuenta los componentes biológico, psíquico y sensorial, valiéndose la perito de su experiencia para valorar la historia clínica completa, y del examen físico realizado a la paciente, el cual no fue realizado por la Junta de Calificación; finalmente relievó que la referida calificación se ajusta a los parámetros del Manual Único de Calificación de Invalidez, no fue tachada de falsa, y no fue desvirtuada, en cuando su idoneidad (minuto 00:31:15, doc.51, carp.01).

### **1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión, el vocero judicial de la señora Martha Yeny Zuleta Gómez adujo que la Junta Regional de Calificación de Invalidez no tuvo en cuenta las ideas psicóticas e intento de suicidio reportados en la historia clínica, y que ante las dudas que asaltaron el convencimiento del *a quo* lo más procedente, en procura de salvaguardar los derechos fundamentales de la demandante, hubiera sido decretar la práctica de dictamen pericial adicional y del interrogatorio de la demandante, pruebas que solicita sean practicadas en esta instancia del proceso (doc.03, carp.02).

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiéndose que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y los

artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, respectivamente.

## **2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA INSTANCIA**

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- Que la señora Martha Yeny Zuleta Gómez nació el 30 de junio de 1985 (pág.162, doc.01, carp.01), labora al servicio del Hospital San Vicente de Paúl en Barbosa – Antioquia, desempeña el oficio de auxiliar de enfermería, y sufrió un accidente de trabajo el 25 de febrero de 2009 al ser golpeada en la cabeza, por un paciente psicótico, con un objeto contundente (hecho primero aceptado en la contestación – ver págs.07, 338, doc.01, carp.01).
- Que fue calificada por la Dirección de Medicina Laboral de Colmena Seguros S.A., mediante el Dictamen 2148054-1 del 09 de diciembre de 2016, con una pérdida de capacidad laboral del 21,30%, estructurada el 06 de octubre de 2015, por causas de origen profesional, derivadas del accidente de trabajo que sufrió el 06 de octubre de 2015 (págs.10-14, doc.01, carp.01).
- Que fue calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, a través del Dictamen 078208-2018 del 15 de febrero de 2019, con una pérdida de capacidad laboral del 35,10%, estructurada el 09 de enero de 2018, por causas de origen profesional, derivadas del accidente de trabajo que sufrió el 25 de febrero de 2009 (págs.370-375, doc.01, carp.01).
- Que fue calificada por la Dra. Paola Andrea David Tulcán, mediante el Dictamen 39215766-1 del 07 de marzo de 2019, con una pérdida de capacidad laboral del 68,08%, estructurada el 07 de marzo de 2019, por causas de origen profesional, derivadas del accidente de trabajo que sufrió el 25 de febrero de 2009 (págs.530-536, doc.01, carp.01).

- Que fue calificada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, a través del Dictamen 39215766-13798 del 05 de agosto de 2021, con una pérdida de capacidad laboral del 35,10%, estructurada el 09 de enero de 2018, por causas de origen profesional, derivadas del accidente de trabajo que sufrió el 25 de febrero de 2009 (doc.36, carp.01).

### **2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER**

Debe determinar la Sala:

¿Si a la señora Martha Yeny Zuleta Gómez le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez a cargo de Colmena Seguros S.A., efecto para el cual tendrá que establecerse si en el plenario obra prueba idónea que conduzca a determinar que aquella perdió la capacidad para laborar por lo menos en el 50%, como consecuencia del accidente de trabajo acaecido el 25 de febrero de 2009?

### **2.4.- TESIS**

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual a la demandante no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la prestación pensional deprecada, siendo que en el plenario no obra medio demostrativo idóneo que acredite el acaecimiento del riesgo de la invalidez, en la medida en que el dictamen rendido por la Dra. Paola Andrea David Tulcán no tiene la *virtud probandi* para desvirtuar las conclusiones de los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación. Consecuentemente la sentencia de primera instancia será confirmada.

### **2.5.- PREMISAS NORMATIVAS**

El artículo 9º de la Ley 776 de 2002 define el estado de invalidez de origen profesional, así:

*“ARTÍCULO 9o. ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales, se considera inválida la persona que por causa de origen profesional no provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación.*

*En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pérdida de la capacidad laboral se hará por el equipo interdisciplinario establecido en el artículo 6o. de la presente ley, dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiere concluido el proceso de rehabilitación integral, de existir discrepancias, se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez, quedando a cargo de la entidad de Seguridad Social correspondiente el pago de honorarios y demás gastos que se ocasionen”*

Por su parte, el artículo 10 de la Ley 776 de 2002 determina el monto de la prestación:

*“ARTÍCULO 10. MONTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso:*

- a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación;*
- b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de liquidación;*
- c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se incrementa en un quince por ciento (15%)”*

A su vez, el 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012, preceptúa cuales son las entidades competentes, en sede administrativa, para efectuar la calificación del estado de invalidez:

*“ARTÍCULO 41. CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ. El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos*



*siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez vigente a la fecha de calificación. Este manual será expedido por el Gobierno Nacional y deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral.*

*Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, a las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales”.*

Y el artículo 11 del Decreto 1352 de 2013 determina:

*“ARTÍCULO 44. CONTROVERSIAS SOBRE LOS DICTÁMENES DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ. Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la Justicia Laboral Ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del proceso judicial, el Director Administrativo y Financiero representará a la junta como entidad privada del Régimen de Seguridad Social Integral, con personería jurídica, y autonomía técnica y científica en los dictámenes”.*

En relación con el valor probatorio de los dictámenes emitidos en el trámite administrativo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que el dictamen emitido por las Juntas de Calificación de la Invalidez no puede ser considerado prueba única, solemne o tarifada para determinar la pérdida de la capacidad laboral:

*“El ataque esta edificado fundamentalmente en la aseveración según la cual el juzgador de segundo grado incurrió en un error de derecho consistente en dar por probado que no hubo accidente de trabajo, pese a que la prueba solemne acerca de la calificación de origen del*

*accidente lo acredita fehacientemente, es decir el dictamen emanado de la junta de calificación. Planteamiento que resulta inexacto pues la referida prueba no es más que un experticio (sic) que la ley estableció debía ser practicado por unos determinados entes, lo cual difiere claramente de lo que es una prueba solemne.*

(...)

*En consecuencia, al no estar en presencia de un medio probatorio solemne, en el sub lite al Juzgador de alzada le era permitido, conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba, acoger aquellos elementos de convicción que le den mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso, en atención a lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y sobre todo en casos tan especiales como lo es la protección de un derecho fundamental como ocurre en el asunto de marras” (CSJ SL del 29-06-2005, radicado 24392, SL del 18-03-2009, radicado 31062, SL del 06-03-2012, radicado 35097, SL-5622 de 2014, SL-42451 de 2016, SL-877 de 2020, SL-2756 de 2020).*

Sin embargo, cumple relieves que la jurisprudencia laboral también ha sido pacífica al indicar que *“los jueces del trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las deficiencias, discapacidades y minusvalías”* (CSJ SL del 19-10-2006, radicado 29622, SL-16374 de 2015, SL-5280 de 2018, SL-1044 de 2019, SL-2349 de 2021).

Así las cosas, la jurisprudencia ha colegido que, al ponderar las conclusiones de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, el juez: *“... debe comprender el tema probatorio, primero, desde el perfil científico que lo identifica y distingue, y luego interiorizarlo, arropándolo con el manto jurídico y las consecuentes derivaciones, que provocará la sentencia, sin olvidar que la potencial relevancia de la prueba científica para esclarecer el hecho o para establecer la convicción sobre la verdad del hecho, no es desde luego absoluta [...]. No se le puede pedir al Juez que posea una sapiencia igual o superior a la del perito, por lo que el control*

*de la prueba, debe realizarse mediante el análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos entregados o por la racionalidad del procedimiento y conclusiones, ponderando con cautela y guiándose por el esquema racional que le permitirá, a través de las reglas de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito del medio persuasivo” (CSJ SC-7817 del 15-06-2016, radicado 11001-31-03-034-2005-00301-01).*

De ahí que la decisión del problema jurídico planteado necesariamente conduce a que el juez de la causa acoja el dictamen que mayor convencimiento le genera, en aplicación del principio de libre formación del convencimiento (artículo 61 del CPTSS), sin dejar de considerar que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (artículo 164 del CGP), que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (artículo 167 del CGP), y que la prueba pericial es necesaria para verificar hechos que interesan al proceso y requieren de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos (artículo 226 del CGP).

## **2.6.- CASO CONCRETO**

De tal manera, era del caso que al plenario se incorporara un dictamen de pérdida de capacidad laboral, contentivo de un concepto experto médico-científico sobre el grado de invalidez de la actora, fundado en consideraciones de orden fáctico sobre la situación que es objeto de evaluación, en el que se relacionen los hechos que dieron lugar a la enfermedad, y que soporten los supuestos de hecho planteados en el libelo inaugural, esto es, que diera cuenta de que la señora Martha Yeny Zuleta Gómez realmente perdió el 50% o más de la capacidad para laborar, con ocasión del accidente de trabajo que sufrió el 25 de febrero de 2009.

Para los anteriores efectos, la parte recurrente pretende que sea considerado el Dictamen 39215766-1 del 07 de marzo de 2019, rendido por la Dra. Paola Andrea David Tulcán, y que determina una pérdida de capacidad laboral del 68,08%, estructurada el 07 de marzo de 2019 (págs.530-536, doc.01, carp.01), y se desestimen las valoraciones expuestas por la Junta Nacional de Calificación de

Invalidez en el Dictamen 39215766-13798 del 05 de agosto de 2021 (doc.36, carp.01), quien a su vez confirmó la calificación emitida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, a través del Dictamen 078208-2018 del 15 de febrero de 2019, en el sentido de establecer una pérdida de capacidad laboral del 35,10%, estructurada el 09 de enero de 2018 (págs.370-375, doc.01, carp.01).

Lo primero que debe advertirse es que, aunque el dictamen rendido por la Dra. Paola Andrea David Tulcán fue allegado por fuera de la oportunidad procesal que tenía la parte actora para pedir pruebas (artículo 227 del CGP, concordado con los artículos 25 y 28 del CPTSS), su incorporación está prevista de validez y legalidad en la medida en que su contradicción fue garantizada (docs.24-40, carp.01).

En relación con el contenido del dictamen, puntualiza la Sala el análisis de las deficiencias, encontrando que las deficiencias por cefaleas – migraña, derivadas del diagnóstico de *cefalea postraumática crónica*, fueron calificadas en ambos dictámenes con la Tabla 12.6 del Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional adoptado mediante el Decreto 1507 de 2014, solo que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez les asignó un porcentaje del 3%, que corresponde a la Clase 2 (moderado y frecuente), mientras que la Dra. Paola Andrea David Tulcán, le asignó un porcentaje del 5%, correspondiente a la Clase 5 (muy severo y continuo).

Para dirimir esta diferencia, conviene traer a colación las Tablas 3. y 4. del referido decreto, que determinan la frecuencia en el tiempo y la severidad funcional, y con base en las cuales se colige que la sintomatología es moderada y frecuente, cuando compromete entre el 26% y el 50% de la funcionalidad, durante el 34% y el 66% del día, y que es muy severa y continua, cuando compromete más del 75% de la funcionalidad, durante el 67% o más del día; criterios con base en los cuales esta corporación colige que la calificación más ajustada a la historia clínica de la señora Martha Yeny Zuleta Gómez, es la rendida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, siendo que, aunque la

Dra. Paola Andrea David Tulcán, calificó éstas deficiencias como muy severas y continuas, el historial clínico referenciado en su dictamen, no da cuenta de un compromiso igual o superior al 75% de la funcionalidad, ni la presencia de cefaleas durante todos los días.

De otro lado, las deficiencias por pérdidas de conciencia episódicas, derivadas del diagnóstico de *epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones focales parciales y con ataques parciales simples*, fueron calificadas en ambos dictámenes con la Tabla 12.1 del Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional adoptado mediante el Decreto 1507 de 2014, asignándosele un porcentaje del 25% por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que corresponde a la Clase 1 (presenta de 1 a 2 episodios anuales, y no evidencia de deterioro de las funciones cerebrales), y un porcentaje del 75%, por parte de la Dra. Paola Andrea David Tulcán, correspondiente a la Clase 3 (presenta de 1 a 3 episodios mensuales de epilepsia, y evidencia de deterioro leve de las funciones cerebrales), y consultados los conceptos médicos relacionados en cada dictamen, se considera nuevamente que la calificación que más se ajusta a la historia clínica de la señora Martha Yeny Zuleta Gómez, es la rendida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, teniendo en cuenta que el historial clínico referenciado por la Dra. Paola Andrea David Tulcán no da cuenta de que la demandante tenga entre uno y tres episodios mensuales, incluso refiere “... *sin crisis hace 2 meses*”.

En lo que respecta al deterioro de las funciones cerebrales, se advierte que su valoración por parte de la Dra. Paola Andrea David Tulcán, se deriva exclusivamente del Informe de Evaluación Neuropsicológico, ordenado por la misma calificadora, y del que la Sala se aparta por las mismas razones esbozadas por el cognoscente de la primera instancia, esto es, porque las consideraciones allí plasmadas no encuentran respaldo fáctico en el historial clínico que de la condición médica de la demandante se venía recopilando por las entidades adscritas a la Empresa Promotora de Salud a la que se encuentra afiliada, esto es,

no corresponde ni guarda coherencia con el criterio objetivo que veían reportando los médicos tratantes.

Adicionalmente se advierte que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez calificó las deficiencias por trastornos mentales y del comportamiento, bajo el diagnóstico de *trastornos de adaptación*, y para el efecto, aplicó la Tabla 13.4 – Trastornos por estrés, fijando un porcentaje del 20%, correspondiente a la Clase 1 (trastornos por estrés postraumático, presencia de síntomas y signos de ansiedad), mientras que la Dra. Paola Andrea David Tulcán, bajo el diagnóstico de *episodio depresivo grave con síntomas psicóticos*, aplicó la Tabla 13.2 – Trastornos psicóticos y del humor, asignando un porcentaje del 40%, correspondiente a la Clase 2 (trastornos del humor, antecedentes de episodios mayores del humor).

Al respecto, se reliva que, si bien los conceptos médicos rendidos por los galenos adscritos a la red de prestadores de la Empresa Promotora de Salud a la que se encuentra afiliada la demanda, refieren trastorno de adaptación, trastorno mixto de ansiedad y depresión, no refieren la presencia concurrente de los síntomas depresivos y maniacos descritos en el numeral 13.4.2. del Decreto 1507 de 2014 durante un período mínimo de dos semanas; y aunque los pensamientos de muerte o ideación suicida son síntoma de episodios depresivos y maniacos, lo cierto es que su presencia solo fue documentada por la psiquiatra particular Dra. Juliana Vergel, el día 02 de marzo de 2019, fecha en la que, tal y como lo destacó el juez de primera instancia, la actora también consultó en la EPS, pero sin hacer referencia a dicha sintomatología, y sin necesidad de hospitalización, siendo del caso relivar que, según lo indicado por la perito, la presencia de la sintomatología descrita por la psiquiatra particular necesariamente requiere atención intrahospitalaria.

En lo que tiene que ver con la calificación de las restricciones del rol laboral, se advierte que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez designó un porcentaje del 10%, que corresponde al puesto de trabajo adaptado, mientras que la Dra. Paola Andrea David Tulcán, fijó un porcentaje del 20% que corresponde al

cambio de rol o de puesto de trabajo; sin embargo, se advierte que en el segundo de los dictámenes no se hace mención a las restricciones médico laborales con base en las cuales la perito llegó a dicha conclusión, siendo del caso indicar que la única recomendación que se encontró al respecto fue la de no realizar turnos nocturnos, restricción que no corresponde a un cambio de rol, sino más bien a un puesto de trabajo adaptado; también cumple relieves que durante la sustentación del dictamen, la perito Dra. Paola Andrea David Tulcán refirió que no tenía por acreditado que la demandante solo estuviere laborando el 50% de la jornada.

Finalmente, conviene destacar que, aunque en la sustentación del dictamen la Dra. Paola Andrea David Tulcán refirió que la calificación de la pérdida de capacidad laboral de la actora tuvo como principal sustento el examen físico que le hizo a la paciente, lo cierto es que, para la evaluación por alteraciones del sistema nervioso central y periférico deben considerarse, no solo los signos y síntomas, sino también los estudios clínicos que permitan identificar la localización del daño en el sistema nervioso (ver numeral 12.3. del Decreto 1507 de 2014), y que para la evaluación de las deficiencias por trastornos mentales y del comportamiento debe tenerse en cuenta, entre otros, el diagnóstico y el historial clínico (ver numeral 13.3.1. del Decreto 1507 de 2014), máxime si se tiene en cuenta que la perita calificadora admitió no tener formación especializada en el área de la sicología.

En resumen, a juicio de este Juez Plural, el Dictamen 39215766-1 del 07 de marzo de 2019, rendido por la Dra. Paola Andrea David Tulcán (págs.530-536, doc.01, carp.01), no tiene la fuerza probatoria suficiente, por ausencia de base fáctica y científica suficiente, para acreditar que la señora Martha Yeny Zuleta Gómez perdió el 50% o más de la capacidad laboral y/o ocupacional, y a partir de ello, lo procedente será confirmar la sentencia de primera instancia.

## **2.7.- PRUEBAS EN LA SEGUNDA INSTANCIA**

Finalmente, cumple memorar que el decreto y práctica de pruebas en la segunda instancia está regulado en el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 41 de la Ley 712 de 2001, y en virtud del mismo, las partes no pueden solicitar del tribunal la práctica de pruebas no impetradas ni decretadas en primera instancia, y solo podrán practicarse en la segunda instancia, las pruebas decretadas en la primera instancia, que se dejaron de practicar sin culpa de la parte interesada, presupuesto normativo con base en el cual la Sala estimó que no era procedente que en esta instancia se practicara el interrogatorio de parte y el dictamen de pérdida de capacidad laboral peticionados por el apoderado judicial de la parte actora en los alegatos de conclusión, siendo que los referidos medios de prueba no fueron solicitados por la parte interesada durante el trámite de la primera instancia.

En adición a ello, la demandante puede solicitar la revisión de su calificación en sede administrativa, en cualquier momento al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.53 del decreto 1072 de 2015.

Sin necesidad de otras elucubraciones, la Sala confirmará sentencia de primer grado. Costas en esta instancia a cargo de Martha Yeny Zuleta Gómez, por habersele resuelto desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto. Se fijan como agencias en derecho en favor de Colmena Seguros S.A., la suma de \$1.160.000 que corresponde a un (1) SMLMV.

### **3.- DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

### **FALLA:**




**1.-** Se **CONFIRMA** la sentencia proferida el 15 de marzo de 2023 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Martha Yeny Zuleta Gómez contra Colmena Seguros S.A.

**2.-** Costas en esta instancia a cargo de Martha Yeny Zuleta Gómez y en favor de Colmena Seguros S.A; se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.

**3.-** Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,

  
**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**

  
**CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES**

**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**

**(Sin firma por ausencia justificada)**